



Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

61923/2019. - "DOWNEY PRODUCCIONES S.A. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO".

Buenos Aires, 18 de marzo de 2025.- AMD

**Y VISTOS, CONSIDERANDO:**

I.- Que, por medio del [pronunciamiento](#) del 30/10/2018 (y aclaratoria rechazada de fecha 15/11/2018), la Sala "B" del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, por mayoría, confirmar parcialmente las resoluciones apeladas, en cuanto determinan el impuesto y accesorios del ajuste tratado en los Considerandos V y VII, y revocarlo en la medida de lo expresado en el Considerando VI.

Asimismo, se ordenó al Fisco Nacional que, en el término de 30 días, practicara una reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la sentencia y, por último, se impusieron las costas en proporción a los respectivos vencimientos (ver fs. 92/107 y fs. 111 del documento digitalizado).

II.- Que, para decidir de tal modo, luego de ser reseñados los antecedentes del caso, se desestimó la nulidad invocada por la actora, en el entendimiento de que los argumentos vertidos para fundarla, demostraban que únicamente se trataba de una mera disconformidad con la forma en la que el juez administrativo había resuelto la cuestión y que ello excedía el marco de las nulidades.

Respecto del fondo de la cuestión debatida, el T.F.N. recordó que la actividad que realizaba la parte actora y sus prestaciones se encontraban alcanzadas por el Impuesto al Valor Agregado, en virtud de lo normado por el artículo 3, inciso "e", punto 20 de la ley del tributo. A su vez, citó la exención que contemplaba el artículo 7, inciso "h", apartado 10 de la misma norma.

En esas condiciones, apuntó que con relación al impuesto referido, la contribuyente se encontraría alcanzada por el tributo cuando la presentación del grupo musical se hubiera efectuado cobrando un caché fijo o realizando la coproducción, y exenta cuando se encargara de la venta de entradas para el acceso a conciertos o recitales musicales en donde actuara dicho grupo, siempre que se tratara exclusivamente al acceso al evento.

Posteriormente, indicó que la actora era un sujeto obligado a la emisión de comprobantes por las locaciones y prestaciones de servicios que realizara, en virtud de lo normado por el artículo 1º de la Resolución General de A.F.I.P. N.º 1415 (según la cual aquellos debían ser emitidos y entregados el día en el que se concluyera la ejecución de la actividad o en la que se percibiera el precio, de conformidad con lo expresado en el artículo 13 de ese dispositivo).





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

Así, el tribunal *a quo* destacó que la fiscalización concluyó que la recurrente no había emitido la documentación correspondiente y que, por ello, no facturó sus operaciones con arreglo a la normativa vigente. De igual manera, remarcó que la autoridad administrativa advirtió la existencia de graves deficiencias en la documentación y registro de la actividad examinada, que se encargó de detallar.

En forma concordante, advirtió que el Fisco había basado su pretensión en la información que había brindado la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (S.A.D.A.I.C.), *“[l]a cual ha informado los eventos en los que interviniera el grupo musical “La Barra” en la categoría de “bailes”, considerando a los efectos de determinar la base de imposición las liquidaciones de aranceles proporcionadas por S.A.D.A.I.C., habida cuenta que la documentación y registraciones contables de la recurrente presentan graves falencias [...]”*. (sic).

Luego, señaló que de la circularización efectuada por el Fisco Nacional a S.A.D.A.I.C., era posible observar ingresos declarados por la recurrente que coincidían con algunos de los espectáculos informados por S.A.D.A.I.C. y que, en otros casos, se observaba, que la firma había declarado parcialmente los ingresos, toda vez que no coincidían con la supuesta recaudación establecida por la Sociedad para el cobro de su arancel o que, directamente, se había omitido declarar el ingreso. También destacó que se consideró el caso de las actuaciones realizadas en forma gratuita, en las que no se verificaban ingresos imputables.

En ese orden de ideas, apuntó que de la información proporcionada por la entidad, surgía que: *“[l]os ingresos no encuadran en la exención establecida por la ley, ya que no se acreditó que los eventos sean conciertos o recitales, toda vez que del planillado aportado por S.A.D.A.I.C. queda claramente determinado que las actuaciones del grupo La Barra, por las que la entidad percibe su porcentaje, corresponden a “baile” [...]”* (sic).

Así las cosas, el T.F.N. desestimó los agravios de la contribuyente articulados sobre la base de considerar que Downey Producciones S.A. no producía la totalidad de los eventos en que participó el grupo musical “La Barra”, habida cuenta de que: *“[l]a recurrente no ha aportado información alguna que permita identificar a quienes atribuye la realización de los mismos, al tiempo que ha reconocido la representación del grupo en forma exclusiva [y que] de la información recolectada por la fiscalización, de la circularización a S.A.D.A.I.C. surge que la actora no acreditó la existencia de espectáculos que fueron producidos por terceros o las presentaciones gratuitas del grupo más allá de lo informado por la entidad. También debe considerarse que la circularización a*





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

*establecimientos en donde actuó el grupo musical es amplia ya que se labraron aproximadamente 100 actas que están referidas a la actuación del grupo en distintas provincias (Córdoba, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Buenos Aires y Santa Fe). Asimismo, la fiscalización distingue aquellos casos en que los ingresos se atribuyen a la recurrente de los que corresponden a terceros a quienes se los pudo identificar de otros que no, pero que de la información recolectada surge que no son ingresos atribuibles a la actora y en función de lo detallado concluye que una parte importante de los ingresos percibidos por la actuación del grupo musical “La Barra” corresponde a la verificada [...]” (sic).*

En el mismo sentido, consideró inadmisibile la referencia a la intervención de otros artistas en los eventos en los que se había verificado la intervención de Downey Producciones S.A., toda vez que la documentación acompañada no correspondía, en gran medida, a los períodos fiscales ajustados y, aquellos que sí lo hacían, solamente indicaban: *“[l]a pluralidad de los artistas intervinientes, pero no la participación que le corresponde al grupo que representa, ni tampoco se indica por otro medio, cuál es la proporción o medida atribuible a dicha actuación. Asimismo confrontando el contenido de los recibos con lo facturado por la contribuyente en relación a algunos de los eventos en los cuales se verifica una pluralidad de artistas, se advierte que, sin perjuicio de la pluralidad de intérpretes, la titular ha facturado el 100% del monto que los mismos consignan como “importe cobrado” [...]” (sic).*

Calificó como “hechos ciertos” aquellos en los que el Fisco Nacional fundaba su pretensión para objetar los eventos atribuidos a la contribuyente y le atribuyó a la actora una insuficiencia probatoria en la instancia administrativa y de revisión para controvertirla adecuadamente.

Particularmente, detalló el trámite probatorio acontecido, recordó las obligaciones relacionadas con la carga de la prueba (especialmente la necesidad de *“[d]ocumentar todos los actos que involucren al contribuyente sólo puede resultar en su propio beneficio para evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del Ente Fiscal [...]”*) y la presunción de legitimidad de la que gozaban las resoluciones emanadas por la Dirección General Impositiva.

Así, concluyó que debían ser confirmados los ajustes realizados en los Impuestos al Valor Agregado (períodos fiscales mayo 2006 -enero 2009 y febrero





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

2009 -abril 2011) y a las Ganancias (períodos fiscales 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011).

Sin embargo, entendió que debería ser revocado el “ajuste fiscal sustentado en la ley anti-evasión” determinado en las resoluciones correspondientes a los tributos aludidos, ello bajo el entendimiento de que el Fisco Nacional no había cuestionado la real existencia de las operaciones.

Sobre el particular, destacó que las compras y gastos llevados a cabo por la firma no habían abarcado facturas apócrifas o de dudosa procedencia, hecho que se comprobó vía un control muestral de los comprobantes recibidos con las registraciones de los libros “I.V.A. Compras” y “Diario N.º 1 Copiador”.

Además, en cuanto a la forma de cancelación, el escaso movimiento bancario y los ingresos por espectáculos recibidos en efectivo, el organismo con facultades jurisdiccionales indicó que se habían cumplido las disposiciones de las leyes 25.345 y 25.412 y la Resolución General 1547.

En ese sentido remitió, en cuanto a la primera de las normas mencionadas, a lo resuelto por su Sala el 09/04/2012, en los autos caratulados: “Quercia, José Luis”, oportunidad en la cual se expuso que: *“[a]ún cuando los contribuyentes no utilizaran los medios cancelatorios contemplados en el art. 1º de la Ley 25.345 no podría impedirse a los mismos la acreditación de las operaciones, conforme lo prevé el art. 34 de la Ley 11.683, haciendo procedente el consecuente cómputo de gastos o créditos fiscales. Con ello quedaría superado, el evidente obstáculo que aparece al pretender hacer una aplicación lisa y llana del precepto limitativo contenido en el art. 2º de la ley 25.345 toda vez que el mismo aparece claramente divorciado del resto del orden normativo aplicable al caso bajo análisis [...]”* (sic).

De forma concomitante, invocó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso: “Mera”, de fecha 19/03/2014 y señaló que, en el caso, era la misma inspección actuante quien destacó: *“[q]ue en cuanto a los ajustes efectuados a los egresos y a créditos fiscales computados no ha sido puesta en duda la realidad de las respectivas prestaciones, compras o gastos computados por la titular, sino que la improcedencia que a su respecto se imputa deviene únicamente a consecuencia de que sin perjuicio de su existencia, las mismas carecen de efectos en el ámbito tributario, en razón de que tratándose de operaciones comprendidas en la Ley 25.345 y la RG N° 1547/2003 (AFIP) (fs. 22 cuerpo principal) [...]”*.





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

Finalmente, apuntó que no existían agravios respecto de los intereses resarcitorios calculados, motivo por el cual concluyó que correspondía su confirmación.

III.- Que, disconforme con lo resuelto, el [18/12/2018](#) apeló la parte actora, quien fundó su [recurso](#) el 5/07/2019 y cuyo traslado fue contestado el 16/09/2019 (ver fs. 143/164 y fs. 173/197 del documento digitalizado).

La recurrente, luego de efectuar una reseña de los hechos, calificó la sentencia como arbitraria y a tal fin expresó que ella había confirmado que la pretensión fiscal fue realizada sobre base presunta, sustentada sobre hechos que no eran adecuados para formar una convicción suficiente al respecto.

En este orden, cuestionó que se hubiera considerado que toda actuación del grupo musical “La Barra” le era atribuible, en el entendimiento de que se comprobó durante la fiscalización la concurrencia de diferentes modalidades de producción y percepción de ingresos (en ocasiones a nombre del grupo exclusivamente o por conducto de terceros) en los eventos en los que participó el grupo.

Asimismo, acusó la falta de valoración de la nota remitida por S.A.D.A.I.C., que daba cuenta de que el monto total recaudado por los eventos implicados fue percibido por ella (y no por la contribuyente).

Por otra parte, manifestó que la restante información brindada por S.A.D.A.I.C. había sido tergiversada, toda vez que no se vislumbraba el porcentaje de cobranza del grupo “La Barra”, ni quiénes fueron los sujetos que abonaron efectivamente esos importes a la Sociedad; formulando análoga descalificación en torno al encuadre del ámbito y modalidad de actuación del grupo representado, afirmando que el hecho de participar en recitales o conciertos musicales, en modo alguno implica que se trate de un evento destinado al “baile” de los asistentes, y que si ello ocurre es una situación ocasional, que en modo alguno modifica la naturaleza del evento, alcanzado por la correspondiente exención.

Citó doctrina, adujo que los hechos tributarios que le pretendían atribuir no se produjeron y que le causaba agravio la desestimación de la exención que le correspondía a su parte en el Impuesto al Valor Agregado, por detectarse deficiencias en la consignación del pago.

Relató pasajes del voto del Dr. Porporatto y requirió que, ante cualquier eventualidad formal, se aplicara el principio del “informalismo”, contenido en la ley 19.549.

Finalmente, se agravió, limitándose a aludir a la inexistencia de la pretensión fiscal, de los intereses resarcitorios confirmados.







Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

IV.- Que, por su parte el [1/02/2019](#) apeló la parte demandada. Sin embargo, desistió de su recurso con posterioridad, circunstancia que fue admitida por el Tribunal de grado el 26/05/2019 (ver fs. [132/134](#) del documento digitalizado).

V.- Que, el [7/08/2024](#), el Tribunal Fiscal reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco en las sumas de \$ 103.122 (por la representación procesal) y \$ 257.780 (por el patrocinio letrado). Esa regulación fue apelada por la letrada de la demandada, por considerar exiguo el monto reconocido (ver fs. 165 y fs. 167 del documento digitalizado).

VI.- Que, efectuada la reseña que antecede, resulta oportuno recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. *Fallos*: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros y esta Sala, *in re*, “Massuh S.A. c/D.G.I.”, expte. N.º 38.066/2011, del [17/11/2021](#), y “HSBC Argentina Holdings S.A. -TF 48911-I c/D.G.I.”, expte. N.º 19.801/2021, del [1/07/22](#), pronunciamiento confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha [27/12/2024](#), entre muchos otros).

Y, además, tampoco es obligación de los juzgadores ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que se estimen apropiadas para resolver el conflicto (cfr. doc. *Fallos*: 274:113; 280:320; 291:390; 310:267; 321:1776 y esta Sala, *in re*, “Strazzolini, Ronaldo Emilio c/E.N. –A.F.I.P. –D.G.I.”, expte. N.º 71.973/2018, del [16/07/2021](#) y “EIDICO S.A. -TF 46884-I c/D.G.I.”, expte. N.º 22.019/2017, sentencia del [5/12/2022](#)).

VII.- Que, asimismo, es menester tener en cuenta que el recurso previsto en el artículo 86 inciso “b” de la ley 11.683, otorga carácter “limitado” a la revisión de esta Cámara de Apelaciones, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. *Fallos*: 300:985, entre muchos otros).

Ello es así, habida cuenta de que: “[l]o que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuada por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. C.S.J.N., *Fallos*: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (C.S.J.N., *Fallos*: 326:2987 y 334:249) [...]” (cfr. Sala III, *in re*, “La Luguenze S.R.L. (TF





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

31.645-I) c/D.G.I.", expte. N° 27.409/2012 del 31/10/2012; "Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/D.G.I.", expte. N° 4.502/2014 del 29/09/2014; "Frigorífico Pilcomayo S.R.L. (TF 24.222-I) c/D.G.I.", expte. N° 18.124/2016 del 14/09/2017; "Nobleza Piccardo S.A.I.C.Y.F. (TF 33.113-I) c/D.G.I.", expte. N° 83.620/2016 del 16/10/2018; y "Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías S.A. (TF 40.985-I) c/D.G.I.", expte. N° 72.673/2018 del [7/05/2019](#), entre otros).

**VIII.-** Que, así las cosas, es necesario indicar que, por medio de las [Resoluciones N.º 60/2013 \(DV RRCO\)](#) y [N.º 61/2013 \(DV RRCO\)](#) la agencia recaudadora impugnó las declaraciones juradas de Downey Producciones S.A. en los Impuestos a las Ganancias (períodos fiscales 2007 y 2008) y al Valor Agregado (períodos fiscales mayo 2006 a enero 2009). Asimismo, determinó de oficio los tributos citados y estableció saldos a su favor en las sumas de \$ 1.582.319,09 (con intereses resarcitorios que ascendieron a \$ 2.383.903,43) y \$ 2.256.067,95 (con intereses resarcitorios por el monto de \$ 3.443.419,02), respectivamente.

En los fundamentos de los actos citados, se analizaron las objeciones respecto de 82 de los sujetos conectados con la facturación y se constataron falencias en la posición y las facturas emitidas por la empresa relacionadas con: irregularidades en las fechas de impresión en 338 casos y su falta de correlación numérica temporal; la ausencia de boletos, entradas o demás documentos que respaldaran las cantidades y valores declarados por la organización de los eventos; el incumplimiento de los deberes de conservación de la documentación de las operaciones vinculadas con la materia imponible; inconsistencias en las registraciones del libro "I.V.A. Ventas" (trasladados al "Libro Diario Contable"); la falta de individualización de operaciones de pago; inexactitud en los estados contables auditados; incumplimientos a la ley 25.345 y la imposibilidad de determinar su alegada falta de participación en los eventos fiscalizados.

Asimismo, estos problemas justificaron, en la mirada del Fisco, la necesidad de recurrir a la determinación sobre base presunta y valerse de la documentación remitida por S.A.D.A.I.C. para lograr el cometido mencionado.

De otro lado, y por conducto de la [Resolución N.º 64/2014 -DV RRCO-](#) (partes: [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#) y [7](#)), el Fisco Nacional impugnó las declaraciones juradas de la contribuyente en el Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales febrero 2009 a abril 2011) y determinó de oficio y liquidó el gravamen, estableciendo un saldo a su favor de \$ 2.366.840,43, al que se deberían agregar \$ 3.445.593,73, en concepto de intereses resarcitorios.





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

En síntesis, describió la actividad de la actora (producción de espectáculos teatrales y musicales) y le endilgó a las declaraciones juradas presentadas por la actora la carencia total de respaldo documental y registral.

Para sustentar tal posición, recordó que la medida de la obligación tributaria del caso estaba dada, en virtud de lo normado por el artículo 3, inciso “e”, punto 20 de la ley del gravamen, por el monto total de las entradas que se vendían correspondientes a los eventos realizados.

De tal manera, indicó que la medida de la obligación tributaria se encontraba dada por el total de las entradas que se vendieran en los eventos realizados y apuntó una serie de requisitos relacionados con su documentación.

Más adelante, expuso el tipo de facturación que utilizaba la contribuyente y postuló que la emisión de la documentación de respaldo de las operaciones no constituía una mera “exteriorización formal” sino que se trataba de una cuestión esencial y sustancial en la materia. Así, adujo que la actora no había emitido la documentación adecuada para los eventos realizados, sino que la misma resultaba ficticia.

Verificó la ausencia de correlatividad numérica o temporal en la emisión de las facturas, fechas de emisión anteriores a las de la impresión consignadas al pie de las facturas o sobrescritas (situación que también afectó a algunos de los montos indicados en ellas) y otras inconsistencias, enfocándose particularmente en la facturación emitida desde el 1/02/2009 y destacando que el 60% de la documentación implicada presentaba irregularidades.

Luego, le reprochó a la empresa que no llevaba una contabilización diaria, en los términos del artículo 45 del Código de Comercio y sostuvo que la empresa no emitía comprobantes por las prestaciones, simulaba con la emisión de facturas falsas y presentaba deficientes registros impositivos (que afectaban su valor probatorio).

Asimismo, destacó que resultaba apropiado tomar como base de la impugnación de las declaraciones juradas implicadas la información proporcionada por S.A.D.A.I.C., que eran representativas de las operaciones cuestionadas, toda vez que de los 528 eventos en los que se había informado la actuación del grupo musical “La Barra”, Downey había facturado y coincidido en su intervención como representante exclusivo en 439 de ellos.

Indicó qué tipo de constancias documentales hubieran servido a la actora para revertir el criterio fiscal, arguyó que no se pudieron acreditar en el caso actuaciones de los diferentes artistas que ella invocaba y puntualizó que, incluso en aquellos casos en los cuales se podía constatar la presencia de otros







Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

intérpretes, la titular había facturado el 100% de los montos cobrados (sobre esto último, agregó que el hecho de que mediaran numerosos intérpretes no implicaba necesariamente el acuerdo de retribución a cada uno de ellos).

Para justificar la determinación sobre base presunta, realizó observaciones a la documentación empresarial, su facturación, los registros en los libros “I.V.A. Ventas” y “Diario”, así como los estados contables e indicó que la facturación presentada resultaba genérica o irregular según el caso, que los libros presentaban inconsistencias entre ella y la registración de las operaciones y que mediaba una ausencia de la restante documentación respaldatoria para justificar los montos facturados.

En ese sentido apuntó que, para resultar admisible la pretensión de la contribuyente de no acudir a las liquidaciones de aranceles proporcionadas por S.A.D.A.I.C., era necesario contar con la documentación correspondiente a cada evento (esta era: los comprobantes de las entradas vendidas y su valor, los contratos, acuerdos y rendiciones entre partes, medios de pagos, entre otros que no fueron proporcionados).

Invocó diferentes normas relacionadas con las obligaciones de las sociedades mercantiles y contribuyentes en general de llevar la documentación de sus actos de gestión u operaciones y, posteriormente, destacó que de la comparación entre las facturas emitidas por la empresa y la información resultante de S.A.D.A.I.C. surgían 120 casos coincidentes.

Refutó con sustento en cuestiones probatorias lo alegado por la actora respecto de las actuaciones ocurridas en los sitios denominados “Monumental” “Polideportivo Municipal” y “Mini Estado Juniors” y en las Provincias de San Juan y Mendoza, así como también las quejas conectadas con la realización por terceras personas de eventos cuya recaudación se le atribuyó.

En cuanto la impugnación de los créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado y los gastos en el Impuesto a las Ganancias por aplicación de la ley 25.345, se remitió a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados: “Mera, Miguel Ángel c/D.G.I.”, del 19/03/2014.

Finalmente, a través de la Resolución N.º 65/2014 -DV RRCO- (partes: [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#) y [6](#)), el Fisco Nacional impugnó las declaraciones juradas de la actora en el Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 2009, 2010 y 2011) y determinó el tributo en la suma total de \$ 2.424.046,84, con más \$ 2.995.591,36 en concepto de intereses resarcitorios.

En lo sustancial, el acto citado le atribuyó a Downey Producciones S.A. la carencia total de respaldo registral y documental de sus declaraciones juradas.





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

Así, destacó que la contribuyente manifestó que utilizaba facturas de los tipos “A” y “B”, pero que ello no lograba incidir en el carácter ficticio de las operaciones ni rebatir las irregularidades que las afectaban (relacionadas con la falta de comprobación de los datos de quienes provocaban su emisión, la ausencia de correlatividad numérica en la emisión, la existencia de facturas con fecha de emisión anterior a la de la impresión o con la leyenda “anulada”).

Luego, apuntó que de las 602 facturas verificadas por el período 1/05/2008 hasta el 30/04/2011, era posible constatar que casi el 70% poseían una fecha de emisión anterior a la de la impresión.

En esas condiciones, acusó a la contribuyente de: a) no emitir comprobantes por las prestaciones; b) simular con la emisión de facturas falsas; c) operar con facturas irregulares y d) poseer irregularidades en sus registros impositivos y contables.

Además, le atribuyó a la defensa de la actora deficiencias de orden probatorio que impedían revertir el criterio desplegado para impugnar las operaciones y específicamente indicó que resultaba apropiado tomar como base la información proporcionada por S.A.D.A.I.C., a tenor de que, de los 528 eventos en los cuales se había informado la actuación del grupo musical “La Barra”, Downey Producciones S.A. había facturado y coincidido en su intervención como representante exclusivo en 439 (es decir, en el 83% de los casos).

De igual manera, apuntó que no se habían incorporado elementos eficaces al proceso determinativo, como lo serían las rendiciones formalizadas con los contratantes (o, en su caso, con los músicos); los contratos y/o acuerdos celebrados de los que surgiera lo facturado en virtud de las condiciones pactadas con los contratantes, la retribución fijada a los músicos y todo otro factor que permitiera establecer los montos que correspondieran a cada parte o la apropiación de las erogaciones contabilizadas y su correspondencia a un evento generador.

Posteriormente, indicó que lo alegado en torno al contenido de la nota remitida por S.A.D.A.I.C. no podía ser válidamente considerado, al no haberse acompañado la “planilla complementaria” que acreditaba (según los dichos de la actora) la actuación de otros artistas.

No obstante, aclaró que el hecho de que hubieran actuado varios intérpretes no implicaba necesariamente que se hubiera acordado la retribución a cada uno de ellos: “[p]or vía de compartir el monto proveniente de las entradas vendidas [...] no implica que no hubiera correspondido a la responsable el total de la recaudación por la venta de entradas habidas [...]”.





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

Por otra parte, descartó la impugnación deducida respecto del método presuntivo empleado en las liquidaciones practicadas, explicando que las deficiencias que mediaban en la documentación y registraciones imposibilitaban la verificación y determinación por base cierta. Aun así, indicó que los hechos ciertos disponibles (tales como la actuación del grupo musical informada por S.A.D.A.I.C. y la representación exclusiva realizada por Downey Producciones S.A.), habían sido considerados correctamente.

Agregó a ello que, del confronte de las facturas emitidas por la empresa contenidas en las liquidaciones practicadas y notificadas con la información resultante de S.A.D.A.I.C., se verificaban en al menos 120 casos coincidencias exactas entre los valores.

Analizó diversos eventos en los que habría tenido participación el grupo musical con la producción de la contribuyente, en donde se podían constatar numerosas disparidades entre los montos liquidados y facturados declarados y, nuevamente, la falta de registración o constatación adecuada de los montos correspondientes a ella. Igual tesitura aplicó respecto de las manifestaciones actorales relacionadas con la asignación a su parte de eventos y montos que habrían sido producidos y percibidos por terceras personas.

En esas condiciones, expresó que: “[l]os elementos obrantes en los antecedentes administrativos no solo resultan insuficientes para acreditar los hechos aludidos, sino que a ellos se agrega que, conforme resulta de los hechos reseñados, por las irregularidades detectadas en la documentación emitida por la empresa no se acredita fehacientemente las operaciones, ni los ingresos que declara, ni la participación en las relaciones con los terceros que manifiesta haber realizado, ni la oportunidad de su emisión, por lo que en ese marco se ratifican los montos considerados en las liquidaciones atendidas al dar inicio al presente proceso [...]”.

Finalmente, y respecto de la impugnación de los créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado y los gastos en el Impuesto a las Ganancias, se remitió a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados: “Mera, Miguel Ángel c/D.G.I.”, del 19/03/2014.

**IX.-** Que, sentado lo anterior cabe también tener presente la vigencia irrestricta del principio que indica que los actos administrativos gozan de la denominada presunción de legitimidad (cfr. art. 12 de la ley 19.549 y modificatorias y esta Sala, *in re*, “LDC Argentina S.A. c/D.G.I.”, Expte. N° 91.325/2017, del 3/05/2018, entre otros).





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

En tal sentido, cabe señalar que la presunción implica la suposición de que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión. Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que la presunción permite inferir que toda la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, lo cual subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (cfr. *Fallos*: 319:1476, *in re*, “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro”, del 20/08/1997, entre otros).

En palabras de Bartolomé Fiorini, el fundamento de este carácter deriva de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales: a toda ley se la presume constitucional, a toda sentencia se la considera válida, y a todo acto de la Administración se lo presume legítimo (cfr. autor citado, *Derecho Administrativo*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1976, 2da. edición, t. I, p. 348). A lo que cabe agregar que la revisión judicial de los actos concurre para enervar la presunción y, en todo caso, ello significa que la presunción puede ser desvirtuada ante un tribunal (cfr. Comadira, Julio R. -Monti, Laura M., colaboradora, *Procedimientos Administrativos*, Buenos Aires, La Ley, t. I, pp. 231/232 y sus citas).

Es en razón de la vigencia de la citada norma y el consecuente principio, que le correspondía a la parte actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, ofrecer y producir prueba conducente a fin de derribar la presunción de legitimidad y evidenciar los pretendidos errores que afectarían a los actos administrativos impugnados (cfr. art. 377 del C.P.C.C.N., y esta Sala, en autos: “Textiel S.R.L. (TF 76836603-I) c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 34.961/2023, del 29/11/2024, entre muchos otros).

**X.-** Que, llegados a este punto, debe adelantarse que la posición actoral relacionada con los reproches que el Fisco Nacional formalizó con fundamento en la existencia de una omisión de declaración y pago de los tributos implicados y el cómputo indebido de crédito fiscal y de montos de retenciones y/o percepciones improcedentes por carecer de respaldo documental (que oficiaron como causa material de los ajustes en los tributos involucrados en la especie) no puede prosperar.

Para llegar a la conclusión que antecede, en primer lugar cuadra advertir que la recurrente se encuentra efectivamente alcanzada por el Impuesto al Valor Agregado en los casos en los cuales la presentación del grupo musical se efectuara cobrando un caché fijo o realizando una co-producción; que ella se encuentra obligada a emitir comprobantes por las locaciones y prestaciones por sus servicios (cfr. artículo 13 de la Resolución General A.F.I.P. N.º 1415) y que el





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

Fisco Nacional se ha valido de la información proporcionada por S.A.D.A.I.C., conectada con los espectáculos en los que había participado (que se estimaron, en mayor parte, coincidentes con los ingresos declarados por la contribuyente).

Asimismo, debe recordarse que, en materia de prueba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que, las exigencias derivadas del artículo 377 del C.P.C.C.N., deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (cfr. *Fallos*: 328:53, entre muchos otros).

Bajo ese parámetro, es determinante considerar que la recurrente no ha logrado demostrar, de manera concluyente y por conducto de elementos probatorios idóneos al efecto, la existencia de terceras personas que participaran en la producción de los eventos citados, incidieran eficazmente en la facturación de ellos o, en su caso, de presentaciones gratuitas.

Además, tampoco ha desvirtuado adecuadamente la posición del Fisco relacionada con la documentación respaldatoria de sus operaciones y de los vicios contenidos en las facturas efectivamente emitidas (en su carácter de contraparte de la transacción involucrada, y que afectaban su correcta individualización y función como base de cálculo).

Esta situación, que por sí misma se evidencia suficiente para desestimar los agravios en la materia, debe ser complementada con la propia actividad de la recurrente, quien en la instancia anterior provocó que se tuviera por decaído su derecho a producir prueba (cfr., en especial, fs. 513 del “Cuerpo III” del expediente principal).

Y finalmente, en orden al planteo recursivo referido a la existencia de una exención tributaria cuando la actividad del grupo se desarrolla en el ámbito de “recitales” o “conciertos”, preciso es recordar que de la información suministrada por SADAIC, no resultaría que los ingresos en cuestión encuadrasen en los supuestos a los que el régimen tributario considera exentos, pues aparte de que no se acreditó en modo alguno que los eventos en cuestión hubieran sido -como se dijo- “conciertos” o “recitales”, de las propias constancias acompañadas por la mencionada informante, resulta con total claridad que las actuaciones del grupo La Barra -por las cuales la entidad percibió su porcentaje-, corresponden concretamente a “baile”.

Por ello, es que debe concluirse que se han dado en forma concomitante una serie de hechos comprobados, graves y precisos que llevan a presentar un







Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

cuadro de serios reparos respecto de la validez, encuadre y la existencia de las operaciones y que correspondía a la contribuyente, quien en ejercicio de su derecho de contradicción y acreditar la veracidad de sus dichos, debió demostrar las características, modalidades de los bienes y servicios vendidos que menciona la facturación que supuestamente se emitiera a su nombre (cfr., en un sentido similar, Sala IV, *in re*, “Bisi S.R.L. (TF 27.386I) c/D.G.I.”, sentencia del 12/06/2014 y “JBS Argentina S.A. c/D.G.I.”, sentencia del 21/12/2017; y esta Sala, *in re*, “Castignani, Héctor Luis (TF 28750-I) c/D.G.I.”, expte. N.º 21.606/2021, sentencia [del 28 de diciembre de 2023](#)), o en su caso, acreditar de modo fehaciente su falta de participación en los eventos generadores de ingresos gravados, cuya omisión es determinante del rechazo de sus planteos.

De tal modo, y frente a las circunstancias descriptas, corresponde desestimar los agravios de la parte actora también en este aspecto, pues, en última instancia, sólo trasuntan su discrepancia respecto del criterio de valoración de la prueba utilizada en el caso, dejándose a salvo que, el hecho de que el Tribunal Fiscal de la Nación haya acordado preferencia a las probanzas generadas por la autoridad administrativa en la etapa de fiscalización respecto de los que invoca la recurrente, no configura arbitrariedad (cfr., en un sentido similar, *Fallos*: 273:205; 274:35; 276:311, entre muchos otros).

**XI.-** Que, respecto de lo manifestado en torno al cálculo de intereses, debe señalarse que, en rigor, el recurso de la parte actora no se ajustó estrictamente a lo establecido en el artículo 265 del C.P.C.C.N., norma que resulta de aplicación al caso en atención a lo dispuesto por el artículo 91 de la ley 11.683 (t.o.1998 y modif.).

Esto es así, habida cuenta de que se vuelca un discurso subjetivo, que traduce un cuestionamiento meramente formal y por lo mismo, insuficiente para desvirtuar los fundamentos del pronunciamiento recurrido que, en tales condiciones, terminan quedando incólumes, pues en definitiva los argumentos decisivos en los que hace pie la sentencia apelada no han sido objeto de crítica eficaz, lo que impide admitir el recurso (cfr. C.S.J.N. *Fallos*: 333:1657, y expte. A. 1003. XLIV “Alfacar S.A. s/concurso preventivo”, sentencia del 13/12/2011; asimismo, ver *Fallos*: 328: 645, entre muchos otros).

El defecto apuntado ha de ser tenido especialmente en cuenta, a poco que se repare en que esta Cámara ha preconizado reiteradamente que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado. Tal exigencia no se sustituye con una mera discrepancia con el criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél,





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.

De ahí que se haya podido sostener que el respectivo memorial constituye un acto de petición, destinado específicamente a desvirtuar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal revisor.

A su vez, la exigencia concerniente a la crítica concreta se refiere a la precisión que implica señalar específicamente el agravio vertido, mientras que el requerimiento de que aquella sea razonada, alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, el cual debe demostrar en qué reside el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (cfr., en sentido concordante, Fenochietto, Carlos Eduardo -Arazi, Roland, “*Código Procesal Civil y Comercial de la Nación*”, comentado y concordado”, T.I, Astrea, Buenos Aires, 1983, págs. 834/837, y esta Sala, *in re*, “Falk, Gerardo F.J. c/E.N.”, expte. N° 1.291/2005, del [13/03/2012](#), entre otros).

Por cierto, se ha sostenido reiteradamente que la operación de criticar es muy distinta a la de disentir. En efecto, la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación del fallo, con miras a demostrar los errores jurídicos y fácticos que este pudiere contener. Por el contrario, disentir implica meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia, según ha tenido oportunidad de indicar esta Sala, tanto en su anterior integración, *in re*, “Contreras, Hugo S. c/J.E.M.G.E.”, sentencia del 29/03/2011 y sus citas, como en la actual, en autos: “Oro, Guillermo Alberto y otros c/E.N. -D.I.E.”, del [14/02/2012](#), entre otros.

Con una perspectiva afín a la descripta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que no alcanza para descalificar una sentencia el sostenimiento de una opinión diversa o alternativa a la expresada por el juzgador, de por sí insuficiente para demostrar que esta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso, o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. *Fallos*: 305:1058; 306:598; 324:2460; 327:2168; 329:3979, entre otros en los cuales se descartó la tacha de arbitrariedad).

A la luz de estos principios, pesaba sobre la recurrente el deber de demostrar el error en el que habría incurrido el T.F.N., no pudiendo considerarse razonablemente que haya formulado una crítica seria de la resolución recurrida ante este Tribunal, por cuanto al proceder como se mencionó anteriormente no se hizo debido cargo de los fundamentos dados por el pronunciamiento apelado; por manera que el intento de reeditar argumentos ya invocados en la instancia anterior, importa un defecto de fundamentación insalvable (cfr. esta Sala, *in re*, “Ramón S.R.L. c/D.G.I.”, expte. N° 28.367/2019, sentencia del [5/03/2020](#), y





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA II

“Banco Patagonia S.A. (TF 47079-I) c/D.G.I.”, expte. N.º 3.012/2021, del [10/12/2021](#)).

**XII.-** Que, finalmente, y respecto de las costas de esta instancia, cabe destacar que, con motivo de la decisión adoptada, las mismas se imponen a la actora, por no advertir razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (cfr. artículo 68, 1ra. parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).

**XIII.-** Que, previo a tratar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios en favor del Fisco Nacional, deberán regularse los emolumentos de los letrados de la actora en atención al modo en que fueran impuestas las costas en la sentencia del T.F.N. de fecha 30/10/2018, con el objeto de evitar un dispendio jurisdiccional. Oportunamente, elévese la causa.

Como corolario de lo expuesto, este Tribunal **RESUELVE:** rechazar el recurso de la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios, con costas de ambas instancias a la actora (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MÁRQUEZ

